



ACTUALIDAD

3

MEXICO

LA REFORMA DE LOS ELECTORES

Héctor AGUILAR CAMIN

Si hay tal cosa como la voluntad general, en las elecciones de 1988 los mexicanos hemos tenido el más cercano indicio de su existencia. No conocemos en México la alternancia del poder. En las elecciones pasadas tuvimos noticias, al menos, de un veredicto democrático de la nación, de un mandato ciudadano.

Hasta donde puede percibirse, todavía fresco su rumor eufórico, se trata de un mandato radical y, a la vez, extraordinariamente refinado. Su vocación histórica parece ser introducir en México un cambio de sistema político. Su primer paso ha sido la imposición de una reforma profunda, no negociable, pero también cautelosa, con delicados equilibrios, plazos razonables y alternativas claras en caso de incumplimiento.

Las elecciones de julio de 1988 han reformado de hecho al presidencialismo mexicano, cortándole facultades y creándole contrapesos. Le han quitado, por lo pronto, la facultad de emprender reformas constitucionales sin anuencia de la oposición, al configurar una Cámara de Diputados en que el PRI (Partido Revolucionario Institucional) tendrá 260 a 500 escaños. Las reformas constitucionales requieren la aprobación de dos terceras partes del Congre-

Las elecciones de julio de 1988 han reformado el presidencialismo mexicano, cortándole facultades y creándole contrapesos.

so, unos 332 diputados. Para lograr una, el presidente deberá mantener cohesionados todos sus votos y convencer a más de 70 miembros de la oposición.

Han equilibrado también, de un plumazo, las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, volviendo a éste un verdadero poder capaz de oponerse y hasta derrotar las iniciativas presidenciales. Le han conservado al gobierno, sin embargo, una precaria mayoría oficial, suficiente para no paralizarlo del todo. Le permitirá esa mayoría gobernar, pero no avasallar, imponerse pero no aplastar, ganar pero no arrasar.

Luego, han regionalizado y fragmentado territorialmente el poder del régimen. Le han arrebatado la mayoría en el Distrito Federal (DF), vengando así su agravio ciudadano mayor: la inexistencia de elecciones directas en la ciudad más importante del país, sede del poder presidencial y víctima de él. Dice el argumento presidencialista que una autoridad electa en el DF sería tan poderosa que desafiaría al presidente mismo. Han contestado los electores que el poder indirecto y derivado del regente (alcalde-gobernador) será menos legítimo que nunca, ya que será nombrado por un presidente que obtuvo la votación minoritaria en la capital.

Le han arrebatado también al régimen presidencial la mayoría en la segunda ciudad de la república —Guadalajara, ganada por el PAN (Partido Acción Nacional)—

y en varios Estados que eran de su dominio tradicional, como Morelos, Michoacán y Guerrero. En toda la república, el resultado electoral ha dibujado un mapa de intensa competencia y equilibrio electoral, al grado de que bastaría un pequeño aumento del ánimo desfavorable al gobierno —equivalente al 10 por 100 del electorado: 1,9 millones de votos— para emparejar la votación nacional con la segunda fuerza del país. (Si el 10 por 100 de los votos que perdiera el PRI lo ganara el Frente Cardenista, estarían ambos repartiéndose, por mitades, el 80 por 100 del electorado).

Alternancia en el poder

Pero las elecciones de julio han equilibrado o revertido también la tendencia, inquietante hasta el año pasado, de un país dividido en un norte participativo, opositor, panista, y un sur somnoliento, pasivo, priísta. Y han regresado el norte al dominio del PRI, como para no desfondarlo del todo y como para recordarle al país que las tendencias electorales son elásticas, cambiantes, reversibles, de acuerdo con los vaivenes de la voluntad general y no con los agüeros del apocalipsis que todos los días ven hundirse a México en males irreparables.

En suma, las elecciones de julio han puesto al poder presidencial frente a un apoyo condicional de los electores, sometándolo a otros poderes y limitándole el propio, hasta construir la novedosa imagen de un régimen presidencial modernizado, llamado a luchar contra la corriente para imponer su proyecto, sujeto a la auditoría de la sociedad y obligado a negociar permanentemente con ella —obligado también, por lo mismo, a formar un gobierno de personas capaces de esa negociación: no un gabinete de amigos del presidente, que además puedan ser políticos profesionales, sino un gabinete de políticos profesionales, que además puedan ser amigos

del presidente, en las inéditas condiciones por venir de un presidencialismo «débil», vale decir, controlado por otros poderes, equilibrado, vigilado, competido, como en cualquier país democrático del mundo.

Las elecciones de julio 88 han instalado un régimen creíble de partidos en México, un régimen capaz de conducirlo —paso a paso, pero en cámara rápida, según se ve— a la experiencia democrática por excelencia que no hemos tenido en este siglo: la alternancia pacífica en el poder.

Para empezar en ese camino, los electores han demolido la hegemonía del PRI y puesto en entredicho el vigor incluso de su índole mayoritaria. Pero han demolido también el auge del PAN y rehusado el esquema de un insatisfactorio bipartidismo PRI-PAN, para construir una tercera opción equilibradora, a la izquierda del PRI, verdaderamente competitiva con él, porque es parte de la corriente central del país, de su historia profunda y cotidiana, de su cultura política mayoritaria. Han equilibrado entonces el juego creando, en unos meses, un espectro de opciones que en verdad representa y expresa la voluntad nacional. Han dado vida electoral y partidaria a la cuestión social de un país que tiene el corazón echado a la izquierda.

También han plantado a la oposición ante el desafío de abandonar su minoría de edad y prepararse para el gobierno. Han puesto a la ciudadanía toda frente a la gran novedad nacional de que, en adelante, sus votos contarán más que sus agravios y deberán usar más la cabeza que el estómago. Contra lo sucedido hasta ahora, en adelante las elecciones mexicanas no serán sólo el lugar de los desahogos ciudadanos, sino el de sus preferencias por programas de gobierno y gobernantes reales, el instrumento efectivo de su voluntad. Frente a esa ciudadanía recién nacida, los candidatos y programas de la oposición tendrán que volverse opciones convincentes de gobier-

Los electores han dado vida electoral y partidaria a la cuestión social de un país que tiene el corazón echado a la izquierda.

no. No, como son todavía en la mayor parte de sus propuestas y actitudes, convocatorias públicas del rechazo y el hartazgo.

«Volver a la revolución»

Las elecciones de julio 88 refrendaron el mandato a la continuidad del régimen — con las reformas sustanciales que le han establecido. Pero lo hicieron como quien entrega una última oportunidad, castigando severamente la actuación del gobierno y sus magros frutos. Fueron, en ese sentido, una clara advertencia de rechazo al camino elegido; en el aluvión del cardenismo, significaron un voto de regreso a las fórmulas ideológicas y políticas de la revolución mexicana.

«Volver a la revolución mexicana» acaso sólo quiera decir en este momento la memoria benévola, entre nostálgica y exasperada, del México anterior a la crisis, anterior a la política de ajuste económico, la contracción del Estado, el castigo salarial, la suspensión de subsidios, la inflación, la especulación, la privatización, las ventajas para el capital, el opresivo pago de la deuda. Es un lugar benigno y deseable, que probablemente nunca existió en el pasado, pero que incendia y mueve la imaginación política de millones de mexicanos, ansiosos de reponerlo en su futuro.

Prendidas de ese lugar posible, bajo el paraguas de la convergencia cardenista,

Las elecciones de julio de 1988 son las únicas competidas y vigiladas de que tenga memoria mi generación.

las elecciones de julio 88 han cuestionado el camino de la modernización del gobierno actual y exigen buscar en el pasado — en el pasado populista e ineficiente que se recuerda, pese a todo, como mejor— una vía menos ajena a las tradiciones y a la historia del país que la emprendida en los 80 por vía del ajuste estructural de la economía y el Estado. Otro mandato sutil y contundente, como todos los de esta elección, por la recuperación del equilibrio.

Por lo demás, la gran reforma nacional de julio 88 son las elecciones mismas. El irritante manejo oficial de la información —prometiéndole datos que no podía dar, creando expectativas que no podía satisfacer— y los reflejos dinosaurios del PRI y la oposición celebrando unos triunfos que no podía probar, denunciando la otra fraudes generalizados que derogaban sus propios triunfos, han echado una sombra exagerada de sospecha sobre la calidad y la transparencia de estas elecciones.

Las elecciones de julio 88 son las únicas competidas y vigiladas de que tenga memoria mi generación; las más competidas y vigiladas de los últimos cuarenta años. Y las más concurridas en la realidad, pese a su abstencionismo del 50 por 100; en consecuencia, también, son las menos inventadas y manipuladas de nuestra historia posrevolucionaria.

Como han sugerido fuentes oficiales, las elecciones mexicanas inventadas han sido,

sin excepción, las anteriores, las que nadie protestó, nuestras elecciones *soviéticas* e invisibles del 70, 80 y 90 por 100 del padrón, pese a la evidencia de las urnas y las casillas vacías. Las elecciones verdaderas que hemos tenido son éstas, las que todos discuten, entre otras cosas porque efectivamente han participado en ellas, tal como lo dice nuestra experiencia directa en casillas y conversaciones, en reportes de prensa y en número de votos efectivamente sufragados. Para alcanzar los 91 millones de votos en las 55 mil casillas de todo el país, tuvo que votar un ciudadano cada dos minutos en cada casilla durante las ocho horas de la elección. Es decir, tuvo precisamente que haber las colas que hubo, la afluencia extraordinaria de votantes que nos consta.

En el río inaugural de esa participación vista por todos, no en las falsas cifras de nuestra historia electoral, está el verdadero mensaje de las elecciones de julio: la decisión de cambiar a fondo nuestro sistema político por las vías institucionales a la mano, en forma gradual, pero drástica, ajustando desde abajo, con los votos, lo que la cúpula no puede o no quiere ver.

Es la mayor reforma política que el país haya vivido en la era del PRI y la que anuncia su término; la más profunda, porque es la más colectiva; la menos esquiva, porque expresa, como ningún otro acto político que podamos recordar, los civilizados imperativos de esa voluntad general que sólo habitaba para nosotros en los libros y ahora parece alentar en nuestra vida pública, tal como ha quedado, a disposición de los ciudadanos, abierta, rica, contradictoria, luego de la reforma de los electores de julio 88.

Grandes esfuerzos

Por lo demás, el territorio de la transición mexicana muestra sus duros perfiles

en todos los órdenes. Los años de reparación después del colapso económico de los años 80 pedirán esfuerzos gigantescos para obtener resultados modestos. Deben crearse un millón de empleos cada año, simplemente para evitar que el desempleo siga aumentando. Si el pago de la deuda se condiciona al crecimiento de la economía y se liberan recursos suficientes para garantizar, digamos, de aquí al año 2000 un ritmo de 2,5 por 100 de crecimiento anual —el promedio entre 1982 y 1988 fue de 0,4 por 100—, para el fin del siglo, dentro de once años, los mexicanos habremos recuperado el ingreso *per cápita* que teníamos en 1980. Si en el curso de los siguientes seis años el salario real de los mexicanos se duplica —lo cual no ha sucedido en la historia del salario en México durante ningún sexenio—, para 1994 volverá a tener su nivel de 1982, y un profesor universitario de primer rango ganará 800 dólares al mes, a diferencia de los 1.300 que ganaba en 1980. La infraestructura productiva y de comunicaciones del país requiere operaciones del salvamento en muchas zonas. La desinversión de estos años en la industria petrolera, por ejemplo, augura un sexenio de desplome progresivo de la producción de crudo si no se reactivan de inmediato las tareas de exploración y explotación primaria. Hay un millón de solicitudes telefónicas no atendidas y otro tanto de servicio precario, inestable o de baja calidad. Se oyen desde hace tiempo en la industria eléctrica voces que anuncian los estragos de la desinversión: si el país crece, no habrá electricidad suficiente para satisfacer la demanda.

Priístas, cardenistas o panistas; neoliberales o «populistas», los gobiernos de México durante el fin del siglo enfrentarán estos límites con recursos exiguos y pocas probabilidades de éxito. Su reino será el de la gradualidad y la insuficiencia, el mundo de los problemas completos y de las soluciones a medias. Las evidencias del hecho no hablan, por necesidad, del apocalipsis. México ha vivido con carencias similares

***Los años de reparación
después del colapso
económico de los 80
pedirán esfuerzos
gigantescos para obtener
resultados modestos.***

toda su historia y no son sus soluciones económicas las que explican su estabilidad, ni basta la magnitud de sus opresiones sociales para dar cuenta de sus estallidos. No obstante, la transición política acelerada por las elecciones de julio 88 añade al horizonte de la dificultad otro orden igualmente decisivo. La gran pieza política perdida en el tránsito no es, como se ha dicho, de la legitimidad, sino algo más terrenal y tangible: el mecanismo de transición del poder. Por primera vez en su historia independiente, en los años 20 y 30 de este siglo los mexicanos dieron con una fórmula de transmisión pacífica del mando. Desde Lázaro Cárdenas (1934-1940), los presidentes han escogido a su sucesor y, desde Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), también a su «tapado». En un sistema de partido dominante, cuasi único, el Gran Elector designó, aparte de su sucesor, a los candidatos del partido del Estado a gobernadores, diputados federales, senadores, alcaldes de grandes ciudades, así como a todo el personal de alto nivel de su gobierno.

No hace falta reiterar las críticas a ese procedimiento cerrado de transmisión y asignación del mando. Son moneda corriente en las celdillas crítica de nuestra opinión pública. Conviene, en cambio, subrayar la extraordinaria virtud de su eficacia: a lo largo de 49 años permitió nueve transmisiones pacíficas del poder en un país que, paralelamente, sufría los más radicales cambios en su estructura demográfica, social, productiva, cultural. He ahí una

En un régimen de partidos competitivos el dedazo presidencial no será suficiente para garantizar el triunfo de nadie.

clave del cambio: el Gran Elector eficiente, autoritario y unipersonal que resolvió por todos esos años el problema mayor de nuestra historia política, se ha ido con los vientos de julio 88 y no volverá. Vivimos los tiempos del último heredero y beneficiario de aquella solución. Carlos Salinas de Gortari. Pero los candidatos elegidos por Carlos Salinas no serán automáticos candidatos triunfantes. Para serlo, deberán vencer a una oposición creciente y contar ya no sólo con el respaldo del Gran Elector, sino también con el de su propio partido, lo cual fortalecerá el partido frente al presidente, a los políticos profesionales frente al partido y al partido —y a la sociedad toda— frente a los aluviones sexenales del favor presidencial.

Fin del «dedazo»

En un régimen de partidos competitivos el dedazo presidencial no será suficiente para garantizar el triunfo de nadie. Y la imposición de viejo cuño sólo traerá derrotas en las urnas de candidatos no arropados por su partido y escisiones en el partido de políticos atrabiliariamente desplazados. Los hábitos de ayer serán justamente las equivocaciones de hoy. En la agenda de la transición, la dirigencia nacional del PRI es hoy una casilla ambicionada por quienes aspiran a ser el candidato presidencial de ese partido dentro de seis años. La política futurista se ha desplazado 180 grados hacia las urnas: difícilmente podrá ser

candidato presidencial del sistema quien no tenga un arraigo claro y una larga presencia política en el partido del Estado, como no lo han tenido los últimos tres candidatos presidenciales del PRI.

Más allá de estos avatares sucesorios, la gran tarea política del Estado y la sociedad de los próximos años será restituir el consenso para una nueva forma legítima y pacífica de transmitir el poder. Ese es el meollo de la reforma que le urge al México de fin de siglo. No creo que pueda pensarse en otra vía que la de abrir plenamente la cabeza y la voluntad de la nación a una democracia política moderna, donde los electores decidan y su decisión, cualquiera que sea, resulte efectivamente inapelable para todos: gobierno y oposición. La ostensible deformidad de nuestro sistema electoral —cuyo centro es la inequitativa posición del partido del Estado, que no distingue sus recursos y sus intereses de los del gobierno— es el mayor obstáculo de esa tarea. ¿Cómo removerlo?

Pienso en cuatro asuntos inmediatos que, por lo demás, están en los labios de todos. Primero, quitar de manos del gobierno el manejo del proceso electoral y ponerlo en manos de los partidos. Segundo, penalizar la transferencia directa de fondos públicos y recursos administrativos a las nóminas y actividades de los partidos contendientes. Tercero, universalizar el sufragio y abrir el Distrito Federal, la más grande ciudad del país, a la experiencia elemental de elegir a sus autoridades. Cuarto, dar al poder legislativo, no al ejecutivo, la definición de las formas específicas que deben adoptar los puntos anteriores.

Nada será tan eficaz, sin embargo, como el largo interregno de ensayo y error que se abre para la política mexicana con su calendario electoral de los próximos seis años. Ahora que el arcón de nuestras emociones políticas viró hacia las urnas, descubrimos con estupor lo que siempre

había estado, silencioso y trivial, frente a nosotros: el calendario electoral de México, uno de los más abigarrados y abundantes del mundo. Entre 1988 y 1994, habrán de celebrarse en México dos elecciones de autoridades, en más de dos mil municipios, una de gobernador en cada uno de los 32 Estados de la república, dos elecciones de diputados locales en cada Estado, dos elecciones nacionales de diputados federales, una de senadores y una de presidente. Nuestra fiesta electoralista será equivalente al destape porno español de los 70: un derramamiento hasta el hartazgo. Y nuestro aprendizaje democrático se dará a contrapelo de nuestra verdadera cultura política, que es por su mayor parte corporativa, autoritaria, paternal, intolerante, lo mismo en el gobierno que en la oposición, por igual en el pueblo que entre los intelectuales. (El espíritu democrático es, al fin, una flor artificial del comportamiento humano, un refinado fruto de la civilización —o de la represión civilizatoria, como quiso Freud y nos ha demostrado Norbert Elías—).

Al final de ese proceso, quizá México tenga en su haber una larga colección de novedades democráticas: alcaldes de la oposición en las ciudades más importantes del país, gobernadores de la oposición en los Estados más ricos —incluido, quizá, por qué no, el Distrito Federal—, cámaras estatales y acaso las federales con mayorías de la oposición, partidos reales conteniendo en público por los votos de los ciudadanos, y ciudadanos votando por quien los persuade más que contra quien los irrita. Si todo eso sucede, al final de estos seis años cruciales tendremos un sistema de partidos equilibrado, creíble, unas elecciones libres de toda sospecha y, así, un nuevo medio legítimo, plenamente moderno, de transmitir el poder. Creo que así será, aunque la violencia y la sombra del pasado autoritario acecharán todo el tiempo el camino, complicándolo y ensombreciéndolo.

*Al final de este proceso
quizá México tenga en su
haber una larga colección
de novedades democráticas.*

Las nuevas variantes del apocalipsis mexicano que ocupan la imaginaria de la opinión pública ilustrada son el golpe de Estado, la ingobernabilidad del país, la ilegitimidad del gobierno, la inconstitucionalidad del proceso político, el triunfo de la línea dura dentro del PRI y el derrumbe del sistema como consecuencia de todos esos factores. Son todas formas de sugerir que el país no puede democratizarse sin derrumbarse, que su vida política sólo puede ser estable si es arcaica, y eficaz si es autoritaria. No es mi impresión. Las catástrofes existen, como lo demuestran los huracanes y los terremotos, pero las elecciones de julio 88 mostraron a un electorado extraordinariamente complejo en sus opciones; un electorado que sigue estando, al final, por encima de los reflejos de los políticos profesionales elegidos y de la opinión pública. Esa reserva de calidad ciudadana y voluntad política ha optado por la modernización gradual del sistema y por su transformación radical, aunque pacífica. No se me ocultan las dificultades políticas y económicas del tránsito, pero en el mediano y largo plazo esa nueva ciudadanía no podrá ser derrotada, creo, ni por la tradición ni por la catástrofe.

Su claro instinto político mostrado en las elecciones de julio 88 encontrará en estos años, espero, el camino a la reposición de la pieza mayor que su propia voluntad ha fracturado y el Gran Elector dejará de serlo para volverse, mucho más sencilla y favorablemente, el Gran Electo.